

Elogios fúnebres

Santos Juliá, El País, 30/05/1999

¿Elogio unánime a un político? Será porque haya muerto, dice el espectador resabido, contagiado ya del cinismo propio de la clase política. Y mucho de eso hay: Ramón Rubial ha debido esperar la visita de la muerte para alcanzar esa última gloria a la que todo hombre público aspira: un respeto compartido por correligionarios y adversarios, un reconocimiento universal, al que se suman incluso los herederos de quienes le hicieron pasar en cárceles sin fin el simple ejercicio de su libertad. Pero he aquí que en medio de este unánime clamor se deja oír una voz singular: el muerto no era un político al uso, sino un luchador. Vaya, dirá el resabido: la muerte no cuenta en este caso; lo que importa es que el muerto no era un político. Y entonces comprende sin más la ristra de adjetivos una y cien veces repetidos para calificar la trayectoria de este político, que realmente no era un político: dignidad, nobles ideales, sacrificio y lucha por la democracia, honestidad, hombre de pocas palabras, nunca mezclado en "cosas raras", figura de talla universal.

No hay más que dar la vuelta a todas estas adjetivaciones para componer la imagen que los políticos tienen de sí mismos: es inimaginable que Piqué diga de ningún socialista vivo lo que dice de este luchador muerto; como lo es que a Pujol -o a Arzalluz- se le ocurra elogiar la calidad humana de algún político que no sea su propia sombra; por no hablar, claro está, de los socialistas a cuya familia pertenecía el recién desaparecido. En lugar de eso, todo lo contrario: asesino, fracasado, ladrón, encubridor, mafioso, de juzgado de guardia: este es el más sobrio florilegio de lo que unos políticos decían de sus homólogos vivos la misma semana en que todos se pusieron de acuerdo para cantar las alabanzas del muerto.

¿Por qué así? Hay que desechar la idea de que el lenguaje al que recurren los políticos para calificarse mutuamente sea resultado de una especial psicología, de sus neurosis de poder, de su carácter intemperante, ni siquiera de

una coyuntura particular: están de elecciones, qué van a decir. No; ese lenguaje apunta a algo más hondo: si los políticos califican de escoria a los de su clase es porque las condiciones de la confrontación política carecen de control de calidad; si los políticos no dicen unos de otros más que cosas miserables es porque las instituciones en las que debía producirse el debate público están afectadas de miseria.

La situación es la siguiente: los políticos no debaten; se insultan. Es más evidente el hecho en tiempo de campaña electoral, pero inunda toda la vida política. Ese fenómeno no sería posible si existieran foros obligados de debate público en los que la agresión verbal descalificara a quien la pronuncia. Imaginemos unas televisiones competitivas, independientes del poder político; supongamos un Parlamento que obligara a argumentar y erradicara esos remedos de control en los que un presidente de gobierno, tras un descomunal fiasco diplomático, pueda responder la primera sandez que le venga a la boca: con tales televisiones, con tal Parlamento sería impensable que la vida política transcurriera sin debates sobre los asuntos que interesan a los ciudadanos.

Medios y Parlamento que fueren a los políticos a una permanente confrontación: eso es lo que nos falta; de eso es de lo que carece nuestra democracia. La televisión pública no es más que un altavoz gubernativo; las privadas han caído en manos de amigos del gobierno; los diputados no hablan. Sin medios de comunicación y sin Parlamento que obliguen a los políticos a exponer argumentos, justificar partidas presupuestarias, someter sus propuestas a discusión, no es posible el debate público. En su lugar, no hay más que especialistas en el titular despectivo, en la frase corta, vacía, expertos en esa forma de chulería que confunde el insulto con el ingenio. A no ser que se trate de un muerto: entonces el elogio retumba unánime, pero sólo porque es inevitablemente fúnebre.

Pereza de votar

Santos Juliá, El País, 06/06/1999

No se trata de la actitud habitual entre los intelectuales de principios de siglo que, espantados por la irrupción de la masa en los espacios públicos, se atrincheraron en una especie de anarco-aristocratismo y denunciaron airados la dictadura del número. "¿Cómo los más podrán ser garantía de acierto? ¿Cómo un entendimiento inculto, torpe, grosero, concupiscente, podrá pesar tanto en la balanza pública como una inteligencia fina, cultivada, generosa, altruista?", se preguntaba Azorín, ilustre literato, antes de mostrar la nula estima que le merecía la democracia y el sufragio universal. Tampoco se trata de aquella otra actitud que juzga el hecho de ir a las urnas como una rutina despreciable ante la magnífica visión de un pueblo en marcha, de unas masas en movimiento, de un proletariado consciente de su destino. Si los anarco-aristócratas del 98 lamentaron la amenaza de la masa, las vanguardias históricas de los años veinte y treinta soñaron con plantarse a su cabeza y conducir las a la victoria final. En ambos casos, las urnas eran un estorbo cuando no un engaño, un artilugio aborrecible, un refugio para la nada heroica clase media.

Hoy nadie argumenta de manera tan cruda contra la democracia, pero una similar actitud de espíritu emerge, cada vez que hay elecciones a la vista, en quienes presumen de cierta superioridad política y moral haciendo saber al público que no van a votar. En ocasiones, no satisfechos con un anuncio que sólo a ellos mismos interesa, justifican esa superioridad argumentando que tanto vale hacer uso del derecho de elegir como abstenerse de su ejercicio, como si la democracia consistiera en algo diferente al gobierno ejercido por representantes electos, como si la democracia pudiera subsistir sobre un lecho de abstención generalizada.

Ni anarcos de periódico y tertulia, ni nostálgicos de la masa en acción, ni abstencionistas exquisitos, habrá que reconocer sin embargo que después de

tres años de barbecho electoral, muchos estábamos tan a gusto, sin ninguna urgencia por votar. A gusto, por la sencilla razón de que si democracia es gobierno por representación, cada vez más nos sentimos menos representados por quienes nos piden el voto. Por supuesto, añorar una representación sin fisuras sería absurdo: el voto no es la adhesión incondicional, ni ir a las urnas implica el entusiasmo propio del que va a la manifestación. No se puede pedir a los políticos que aspiren a ese tipo de representación ni sería conveniente para nuestra salud otorgársela. Pero al menos habría que demandarles que no pongan tanto empeño en no representar nada, en no representar a nadie.

Pues eso es lo que ocurre con creciente intensidad a medida que se suceden las elecciones a las que somos convocados. La política española lleva ya demasiados años encerrada en el vicioso círculo que confunde competencia con aniquilación: a los políticos en campaña sólo parece interesarles el placer endogámico de destruir al adversario. Llegar a ser expertos en el arte del exterminio político es lo que más excita su imaginación, quizá también su líbido. Tan afanados andan en la tarea que no temen bajar el último peldaño de la degradación del debate público para burlarse de alguna característica física del oponente o divertir a los secuaces haciendo chistes rastreros con los apellidos del contrincante.

Más se obstinan los políticos en la destrucción del otro, más ganas de mandarles a paseo. ¿Cómo votar a un señor que ríe su propia gracia cuando llama a su oponente Calumnia? ¿Cómo percibir un representante en quien sólo ilumina su mirada cuando dice Loyo-lina? Queda todavía una semana de campaña. Es posible que los técnicos en mercado electoral ganen de nuevo la partida al convencer a sus clientes de que la mejor manera de rascar unos cuantos votos es arreciar en el ataque al otro. Pero si se consuma su triunfo acabarán por convertir lo que hoy es pereza de votar en puro y simple desistimiento.

Nunca el Gobierno se queja

Santos Juliá, El País, 24/10/1999

Desde su creación en 1956, ningún Gobierno español ha expresado nunca la más leve queja por el tratamiento recibido en Televisión Española. Por la jefatura del Gobierno han pasado desde aquella efemérides personajes tan variopintos como, por orden de aparición en la pantalla, Francisco Franco, Luis Carrero, Carlos Arias, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar. No son muchos, la verdad, sobre todo si se compara con otras épocas en que los presidentes de Gobierno rotaban a gran velocidad. Pero aun con los pocos que son, ya es casualidad que, viniendo de tan enfrentadas posiciones políticas, ninguno de ellos haya manifestado algún malestar, un reproche, ni siquiera un suspiro de resignación, por algo que en TVE se haya dicho de ellos o de sus adláteres.

Por contra, no se conoce ningún líder de la oposición, en tiempos de clandestinidad como de libertad, que no haya pronunciado su más severa repulsa por el gubernamentalismo de TVE. Por supuesto, no es lo mismo quejarse ahora, pertrechada la oposición de cronómetros para medir el tiempo de su presencia, que cuando Fraga señoreaba Prado del Rey desde el Ministerio de Información y mantenía a raya a la oposición. Pero ya fueran los populares cuando los socialistas decidían titulares y vetaban presencias, ya los socialistas cuando los populares abren sus partes informativos con el apasionante relato de la intensa actividad ministerial, lo cierto es que, igual que ningún Gobierno se queja, ninguna oposición ha dejado de quejarse del trato recibido en TVE.

¿Tiene la cosa remedio? Pues sí, quizá podría tener hasta dos, radical uno, reformista el otro. El más radical, en la ola de terceras vías que nos invade, sería su privatización. Al cabo, ¿en qué es pública nuestra televisión pública? Publicidad la escupe a espuestas, como la peor de las comerciales; teleseries, todas las que se quiera; producciones propias, exactamente del mismo calibre que las de cualquier televisión privada. Nada revela que es pública excepto que crece bien agarrada a las ubres del presupuesto. Este Gobierno, que lo ha privatizado todo, podría vender TVE al mejor postor: nadie lamentará una irreparable pérdida para la cultura española.

No lo hará, no; pero no por un desmedido afán por lo público sino porque ningún Gobierno en sus cabales renuncia a tan formidable instrumento de propaganda ni a tan goloso pastel que repartir entre amigos y leales. No sólo no lo hará, sino que en los últimos años las televisiones públicas al servicio de pequeños gobiernos se han multiplicado como hongos. El argumento de canallas en que ha venido a parar la monserga de la recuperación de las señas de identidad vale para todo, para censurar libros como para inyectar dinero y colocar amigos en televisiones creadas a la mayor gloria de los gobiernos de las naciones en construcción.

Descartada la solución radical, queda la reformista. En un trámite parlamentario, Almunia ha propuesto a Aznar una reforma que consistiría en que el Parlamento, en lugar del Gobierno, nombre al director general. Hablando en plata, esa propuesta significa que el director del Ente sería nombrado por consenso entre Gobierno y oposición, esto es, entre Partido Popular y PSOE: interesante iniciativa si no existieran precedentes de *lottizzazione* entre partidos, o sea, de cuotas que los partidos se distribuyen en organismos públicos. En todo caso, merece la pena intentarlo: los socialistas podrían elaborar un poco más su proyecto, someterlo a debate público y presentarlo en debida forma al Congreso. A lo mejor se produce el milagro y en lo que nos queda de vida disfrutamos escuchando por vez primera una queja, una quejita tan solo, de un Gobierno -socialista o popular, el que toque- por el trato recibido en televisión: habría sonado entonces el fin de un periodo histórico que comenzó con Francisco Franco y que perdura como si tal cosa con José María Aznar. Y es que por TVE no pasa el tiempo.

Hazte rico

Santos Juliá, El País, 21/11/1999

Lástima de calendario: si hubiera ocurrido después del segundo triunfo del PP, ningún clamor se habría levantado. Al fin y a la postre, de eso se trataba, de ocupar todo el poder en las grandes empresas privatizadas para construir desde sus presidencias una posición invulnerable; de crear una nueva clase sólidamente asentada en la dirección de empresas que disfrutaran de una situación de monopolio o de oligopolio en sectores estratégicos: petróleo, electricidad, comunicaciones, tabaco, banca. Nombrados presidentes antes del arrebato privatizador que sacudió a los dirigentes del PP a las pocas semanas de ser gobierno, todos ellos han permanecido en sus puestos, con un poder acrecentado, tras culminar la última gran desamortización de la propiedad pública.

Poder acrecentado sobre todo en Telefónica, por la manera de su ejercicio, mitad antiguo régimen mitad posmoderno, y por su limitada capacidad de penetración en un sector que todos los Gobiernos cultivan, los medios de comunicación. En ningún régimen constitucional español ha disfrutado ningún Gobierno de tanto poder en los medios como éste del PP. Periódicos de gran tirada que sigan al pie de la letra las consignas gubernativas, abriendo y cerrando campañas, magnificando o silenciando noticias según al Gobierno convenga, nunca han existido tantos como ahora; nunca tantas emisoras de radio y televisión se han plegado complacientes al servicio de tan pocos. Ha sido un trabajo perfecto, desarrollado ante una opinión pública que había agotado su capacidad de asombro.

Unas empresas que dominan sectores estratégicos, una nueva clase empresarial consolidada, una singular penetración en los medios de comunicación: todo iba a pedir de boca cuando el mejor amigo del presidente del Gobierno anuncia que cien directivos de Telefónica han incrementado en cantidades, no ya exorbitantes, sino astronómicas, su patrimonio mientras otros

cuantos magos de las finanzas lograban triplicar el valor de sus acciones en una empresa filial. Es, claro está, un escándalo, en la acepción literal del término, un alboroto, una sensación, pero también en la moral: a la gente normal, la que alcanza a guardar unas ahorritos y confiarlos a un fondo de inversión, le ha dado un pasmo al saber que por el solo hecho de ser directivo de empresa pueda alguien embolsarse en un santiamén unos cuantos miles de millones de pesetas.

Pero, hombre de Dios, a quién se le ocurre sacar a la luz estas cosas en vísperas electorales, reconviene al presidente de Telefónica su amigo el director de El Mundo, haciéndose eco de la llamada al orden natural de las cosas lanzada por el presidente Aznar -cuarenta años de amistad acrisolada, forjada en pupitres y recreos-. Lejos han quedado los tiempos de Guizot, cuando su *enricheszez-vous* suscitaba eróticas ensoñaciones en la rampante burguesía francesa; tampoco estamos en el Nueva York de los años ochenta, cuando la consigna *get rich* resonaba en todos los confines del mundo. Estamos en Madrid, donde "hazte rico" equivale a corre, coge todo el dinero y vuelve a correr, o sea, un escándalo.

Este complejo político-mediático-empresarial que sucedió a los socialistas al frente del Gobierno se presentó con ínfulas regeneradoras, contra el dinero fácil, contra los pelotazos; prometió un nuevo tiempo de laboriosidad y honradez recompensada por los tranquilos horizontes de una prosperidad tal vez modesta pero inagotable. Bajo ese semblante de sencillez pequeño burguesa se ocultaba sin embargo un mundo de intrigas y ambiciones: dominar sectores estratégicos por medio de una bien planificada red de amigos del presidente y de su vicepresidente segundo. No contaban con que los amigos, sin esperar su reelección, no dejaran ninguna oportunidad por explotar, ninguna *stock option* que apañar. Han corrido demasiado y la gente, de momento, los mira atónita; como tarde en romper a aplaudir ante tanta majeza, lo van a tener muy crudo para seguir corriendo, ellos y sus amigos.